






## ACTUALIDAD NORMATIVA


### COLOMBIA:

 Ley Estatutaria de Antiterrorismo. El 9 de junio de 2004 la Plenaria de la Cámara de Representantes


aprobó en cuarto y último debate el Proyecto de esta Ley.


 Nuevo Código de Procedimiento Penal. El pasado 9 de junio, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el Proyecto de Ley Estatutaria para la implementación de un nuevo Código de Procedimiento Penal.

 Proyecto de Ley Estatutaria de alternatividad penal. Se ha radicado en la Cámara de Representantes.


 Reforma a la Constitución. Está en trámite un proyecto de Acto Legislativo destinado a establecer la posibilidad de Reección inmediata del presidente de la República.


### PERÚ:

 Modificación del Reglamento del Congreso. A través de la Resolución Legislativa N° 030-2003-CR, del 4 de junio de 2004.

 Código Procesal Constitucional. El 31 de mayo se publicó en el diario oficial el primer Código Procesal Constitucional peruano que desarrolla los siete procesos previstos por la Carta de 1993.

### URUGUAY:

 Reforma del Código del Proceso Penal. La ley 17.773, de 20 de mayo de 2004, ha modificado el artículo 113 de este código.

 Reforma Constitucional. El próximo 31 de octubre será sometido a plesbiscito un proyecto de Reforma Constitucional, cuyo objetivo es proteger los recursos hídricos del país y garantizar la existencia de una política al respecto.



Revista 6 - AN Colombia 1

## ACTUALIDAD NORMATIVA

### COLOMBIA

#### LEY ESTATUTARIA DE ANTITERRORISMO.

El 9 de junio de 2004 la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el Proyecto de Ley Estatutaria 176 de 2004 Senado, 211 de 2004 Cámara, mediante el cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2003, conocido como “Estatuto Antiterrorista”, aprobado el pasado 10 de diciembre de 2003. Como se mencionó en una nota publicada en el número cuatro de esta revista electrónica, el Acto legislativo – o proyecto de reforma constitucional – que este proyecto de ley reglamenta, autoriza, entre otras cosas, a las autoridades administrativas que establezca la ley, la facultad de realizar capturas, allanamientos e interceptaciones sin previa orden judicial, así como el otorgamiento de facultades de policía judicial a las fuerzas militares. El Proyecto de Ley Estatutaria “antiterrorista” que se comenta, designa a las autoridades y regula la manera y condiciones como se ejercerán las atribuciones antes mencionadas.

No obstante, para que este proyecto se convierta en ley aún falta el control previo automático de constitucionalidad que debe adelantar la Corte Constitucional y la sanción del Presidente. A este respecto es importante advertir que la reforma constitucional en virtud de la cual se elaboró este proyecto de ley, se encuentra actualmente en estudio de la Corte Constitucional y que la suerte del proyecto de ley que se menciona en esta nota dependerá de la decisión que la Corte adopte sobre la reforma constitucional mencionada.

Texto del Acto Legislativo 02 de 2003

Texto de la Ley Estatutaria

Noticia aportada por Catalina Botero



Revista 6 - AN Colombia 2

## ACTUALIDAD NORMATIVA

### COLOMBIA

#### LEY ESTATUTARIA. NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

El pasado 9 de junio, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el Proyecto de Ley Estatutaria para la implementación de un nuevo Código de Procedimiento Penal. Dicho Código desarrolla el nuevo régimen penal acusatorio, introducido a Colombia mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, el cual modificó los artículos 116, 250 y 251 de la Carta.

El nuevo código penal incorpora el principio de oportunidad que no preveía el régimen anterior y que permite que el Fiscal deje de investigar algunos hechos presuntamente delictivos. No obstante, en la Plenaria del Senado se introdujo una limitación al ámbito del principio de oportunidad con el argumento de que la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Derecho Penal Internacional establecen la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el delito de genocidio, entre otros. Para estos efectos es importante tener en cuenta que en el caso colombiano el derecho constitucional incorpora los Tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado y a las normas de derecho internacional humanitario.

Los argumentos utilizados en el Senado para poner límite al principio de oportunidad fueron, en suma, los siguientes:

Evitar la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad o de los crímenes de guerra, está vetado expresamente por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y habilitaría la instancia de la misma "porque el Estado no pudo o no quiso" llevar adelante el juzgamiento. Adicionalmente, en cuanto corresponde al sistema regional, como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el caso Velásquez Rodríguez, un Estado puede ser internacionalmente responsable por acción u omisión. Es responsable por omisión cuando no cumple con el deber de investigar y sancionar adecuadamente las conductas de violaciones a los derechos humanos. En el mismo sentido, dar al Fiscal la posibilidad de no investigar hechos que impliquen violaciones a los derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales ratificados por Colombia (Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo), podría ser interpretado como la legitimación legal de la omisión del deber de investigar, con lo cual se comprometería la responsabilidad internacional. Adicionalmente, el ejercicio de tales facultades por parte del Fiscal daría lugar a acciones contra el Estado en el plano internacional y la consecuente condena por violación a los derechos humanos (en el caso del ejemplo por los órganos del sistema interamericano).

De otra parte, las facultades que se asignan al Fiscal pueden llegar hasta el punto de dar lugar a una especie de indulto impropio o amnistía judicial – si cabe el término –, dado que se abre la posibilidad del perdón judicial a personas que han cometido delitos que no son susceptibles de indulto o amnistía, es decir, que no pueden ser perdonados ni por el poder político ni por el poder judicial. Tales delitos deben quedar excluidos del ámbito de operación de el principio de oportunidad so pena de que la Corte Constitucional profiera una sentencia de inexequibilidad.

Finalmente, en Sentencia C-459 de 1995, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de una norma que establecía como requisito para investigar ciertos delitos cometidos contra menores, el requisito de la querrela. De acuerdo con la decisión, la norma no sería expulsada del ordenamiento jurídico siempre que se entienda que los delitos enunciados en la norma demandada, no quedan sujetos como condición de procesabilidad a la formulación de la respectiva querrela. En consecuencia, para la Corte existen ciertos delitos que deben necesariamente ser investigados de oficio. Dicha decisión sienta un precedente importante. Aplicada a este caso y atendiendo a la jurisprudencia en materia de delito político y conexos, resulta claro que para la Corporación hay ciertas conductas que en todo caso deben ser investigadas de oficio por el Estado. Se trataría, según la Corte, de delitos atroces – como el secuestro, el terrorismo y, en general, los crímenes que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

Para reafirmar lo dicho hasta ahora basta citar el artículo 3 del proyecto de Código de Procedimiento Penal, que literalmente establece: "Artículo 3º.- Prelación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar bloque de constitucionalidad."

En este sentido, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado desde sus primeras sentencias que el deber asumido por los estados partes de la Convención de "garantizar los derechos reconocidos" en este Instrumento, supone que los Estados deben organizarse de forma que puedan asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Adicionalmente, se puede afirmar que de esta obligación surge el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar toda violación a los derechos humanos. A este respecto ha dicho la Corte Interamericana:

"La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. (...) Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos".

# Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 6 - AN Colombia 3

## ACTUALIDAD NORMATIVA

### COLOMBIA

#### PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA. ALTERNATIVIDAD PENAL.

Ha sido radicado en el Congreso colombiano el Proyecto de Ley Estatutaria 104 de 2003 Cámara, acumulado 85 de 2003 Senado, 95 de 2003 Senado, conocido como “Proyecto de Ley de Alternatividad Penal”, por medio del cual se dicta amnistía a autores del conflicto armado. A consecuencia de las críticas formuladas desde todos los sectores contra el citado proyecto, el Gobierno elaboró una propuesta de modificaciones. Las discusiones comenzarán en el Congreso en la legislatura que tendrá lugar entre el 20 de julio y el 20 de diciembre de 2004.

Texto del Proyecto de Ley.

Texto del Pliego de Modificaciones.

Noticia aportada por Catalina Botero

# Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 6 - AN Colombia 4

## ACTUALIDAD NORMATIVA

### COLOMBIA

#### PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO. REELECCIÓN PRESIDENCIAL.

Ya ha sido aprobado en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el Proyecto de Acto Legislativo No. 12 de 2004 Senado, 267 de 2004 Cámara, en virtud del cual se pretende reformar los artículos 127, 197 y 204 de la Constitución Política colombiana, con el fin de permitir la reelección inmediata de Presidente y Vicepresidente de la República. A partir del 20 de julio el proyecto será sometido a una segunda ronda de discusiones en el Congreso para evacuar los ocho debates que la Carta establece como condición para que tenga lugar una reforma constitucional.

El proyecto de reelección presidencial que se viene debatiendo en el Congreso, cuya relación con la popularidad de la que goza el actual Presidente Uribe es innegable, ha suscitado diferentes argumentos tanto de quienes apoyan la reforma constitucional, como de quienes se oponen a ella.

Al respecto, los partidarios de la propuesta sostienen que la reelección inmediata del presidente es favorable porque permite que los ciudadanos premien o castiguen la labor del gobernante y, decidan dar o no continuidad a las políticas que dicho gobierno viene llevando a cabo. Por su parte, los contradictores de esta iniciativa consideran que la reelección puede traer como consecuencia la concentración del poder en manos del ejecutivo y señalan ejemplos de varios países de América Latina como Perú o Argentina en los cuales se han implementado este tipo de reformas cuando sus mandatarios gozaban de alta popularidad. Muestran adicionalmente la inconveniencia de cambiar las reglas de juego simplemente para permitir que una persona permanezca en el poder durante un periodo mayor al que corresponde a su mandato original y no como una discusión institucional adoptada sopesadamente atendiendo a los pros y contras institucionales a mediano y largo plazo de la misma. No obstante al parecer la alta popularidad del Presidente y las fluidas relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo tendrán como consecuencia la aprobación de la reforma.

Texto del Proyecto de Acto Legislativo.

Noticia aportada por Catalina Botero

# Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 6 - AN Perú 1

## ACTUALIDAD NORMATIVA

### PERÚ

## MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO

El 4 de junio del presente año se publicó la Resolución Legislativa N° 030-2003-CR que modifica diversos artículos del Reglamento del Congreso de la República del Perú. La norma regula el procedimiento y votación para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, así como la votación para alcanzar acuerdo aprobatorio de acusación constitucional y de sanción por infracción de la Constitución, de los funcionarios comprendidos en el artículo 99° de la Carta del 93.

La actuación del Congreso en este caso, respondió a la exhortación e interpretación que realizara el Tribunal Constitucional en su sentencia del 1 de diciembre de 2003 recaída en el Expediente N° 0006-2003-AI/TC.

En ésta el colegiado observó que no existía "(...) procedimiento ni votación calificada alguna para que el Congreso de la República pueda declarar vacante el cargo de Primer Mandatario por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113° de la Constitución(...)" y que dicha omisión podría suponer, de manera irrazonable y por tanto inconstitucional, que el más alto cargo de la Nación pudiera vacar como consecuencia de mayorías simples. En ese sentido, el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso de la República a regular un procedimiento y la necesidad de establecer una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de sus miembros para la causal contemplada en el inciso 2) del artículo 113° de la Constitución.

Esta exhortación fue acogida en la Resolución Legislativa 030-2003-CR a través de su artículo 2° que incorpora el artículo 89-A al Reglamento del Congreso de la República y a través del cual establece el procedimiento y la votación de 2/3 aludidos.

Asimismo, en la referida sentencia se observó que el Reglamento del Congreso no establecía el número de votos requeridos para la procedencia de una acusación constitucional frente a la presunta comisión de delitos de función. Haciendo una interpretación integrativa y valiéndose de la regulación y votación establecidas para el caso del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, señaló que el artículo 89° inciso j) del Reglamento del Congreso, sobre acusación constitucional por delito de función, debería interpretarse en el sentido de que la votación favorable exigida sería la mitad más uno del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente.

Finalmente, el TC advirtió que tampoco se encontraba prevista la votación necesaria para aplicar las sanciones por infracción de la Constitución, frente a lo cual se pronunció porque el número de votos para destituir del cargo a los funcionarios previstos en el artículo 99° de la Constitución, o, en su caso, para inhabilitarlos hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública, por infracción de la Constitución, no debería ser menor a los 2/3 del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente. Esta deducción tuvo como referente la votación requerida para la destitución de autoridades como el Defensor del Pueblo o el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

La interpretación del TC en estos dos últimos supuestos fue acogida por Resolución Legislativa en comentario, cuyo artículo 3° modificó el artículo 89° del Reglamento del Congreso para disponer que el acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en ejercicio de funciones requiere votación favorable de la mitad más uno de miembros del Congreso sin participación de la Comisión Permanente; y que la sanción política por infracción de la Constitución se adopta con una votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso sin la participación de la referida Comisión.

Noticia aportada por Erika García-Cobián

Revista 6 - AN Perú 2

**ACTUALIDAD NORMATIVA****PERÚ****CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL LEY 28237.**

El 31 de mayo se publicó en el diario oficial el primer Código Procesal Constitucional peruano que desarrolla los siete procesos previstos por la Carta de 1993. Nos referimos al hábeas corpus que protege la libertad individual; al hábeas data que garantiza el acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa; al amparo que tutela los demás derechos constitucionales; a la acción de cumplimiento que obliga a la autoridad renuente a acatar un acto administrativo o una norma legal; a la acción popular que elimina los reglamentos inconstitucionales o ilegales; a la acción de inconstitucionalidad contra las leyes que violen la Constitución; y al conflicto de competencias que resuelve las controversias sobre atribuciones entre los poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos regionales y locales.

El Código pretende unificar, fortalecer y modernizar la regulación de estos procesos que no siempre han cumplido con su finalidad de garantizar la vigencia de los derechos humanos y la defensa de la Constitución. Existen algunos antecedentes al respecto. Por ejemplo, Costa Rica cuenta con una Ley de Jurisdicción Constitucional que data de 1989; hay un Código Procesal Constitucional en la provincia de Tucumán, Argentina, de octubre de 1995; y en Venezuela hubo un anteproyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional del año 1989.

En junio de 1995, seis profesores de Derecho Constitucional, Procesal, Administrativo y Penal se reunieron para elaborar un Anteproyecto de Código Procesal Constitucional, en el marco de la Carta vigente. Luego de culminarlo lo remitieron a un grupo de abogados, jueces, fiscales y profesores quienes formularon valiosos aportes, que fueron tomados en cuenta y el texto final fue publicado ("Código Procesal Constitucional. Anteproyecto y legislación vigente", Lima: Palestra, octubre, 2003). Posteriormente, el 15 de diciembre del 2003 un grupo multipartidario de congresistas lo hizo suyo (Proyecto N° 9371/2003-CR) y lo presentó al Congreso de la República. Más adelante las Comisiones de Constitución y Reglamento y Justicia y Derechos Humanos emitieron dictamen introduciendo contadas modificaciones y el Pleno del Congreso lo aprobó en la sesión del 6 de mayo por setenta y dos votos a favor y ninguno en contra. Días después, el Presidente de la República lo promulgó y entregó copia de la autógrafa en acto público al Presidente del Tribunal Constitucional evidenciado así su compromiso con la vigencia de los principios y derechos constitucionales que fluyen del texto.

El Código sistematiza y ordena todos los procesos constitucionales, pues actualmente existen diversas leyes – algunas datan de 1982-, decretos legislativos, y decretos leyes de abril de 1992, que los regulan. Además, introduce cambios sustanciales teniendo como límite el marco de lo establecido por la Constitución vigente. Y es que como lo señala la exposición de motivos del anteproyecto, si se tratara de efectuar cambios constitucionales varias alternativas se hubieran podido plantear. Entre ellas, introducir el "certiorari" para acceder al Tribunal cuando se trata de los procesos de tutela de derechos o establecer una amparo de instancia única para cuestionar las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, las del Consejo Nacional de la Magistratura o las de la Corte Suprema, etc.

Se incorpora un Título Preliminar que fija los principios, el techo ideológico que guía estos procesos. Así, establece los principios procesales que los identifican; la forma cómo deben interpretarse los derechos tutelados por los procesos constitucionales recogiendo lo que ya existe en la doctrina y jurisprudencia, es decir, que deben interpretarse a la luz de los tratados y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agrega, que el propio Tribunal Constitucional deberá fijar el extremo de su fallo que constituye precedente.

Además, para evitar posibles abusos, diseña al amparo como un mecanismo excepcional. Dispone que sólo tutelaré derechos que tengan sustento constitucional directo y no podrá ser utilizado cuando exista otra vía judicial igualmente efectiva que los proteja. Asimismo, precisa los derechos objeto de tutela, como sucede con los derechos sociales (salud, pensión, etc.) y la prohibición de discriminación por razón social o por orientación sexual. La medida cautelar, por regla general, será ágil y eficaz, permitiendo que antes de dictarse sentencia se cuente con una resolución que evite daños irreparables. Lamentablemente, el Congreso estableció un trámite especial, engorroso e inapropiado cuando dicha medida cuestiona actos administrativos municipales o regionales, pues el pedido se presentará ante la Corte Superior e irá en apelación a la Corte Suprema. Dicho agregado, introducido en la Comisión de Constitución y Reglamento, distorsiona la esencia de la medida cautelar y termina siendo discriminatorio además de no garantizar una tutela judicial efectiva.

Se incorporan mecanismos –multas y sanciones- para garantizar que las sentencias sean acatadas. El hábeas data podrá ser interpuesto sin necesidad de carta notarial ni firma de abogado. Además, para agilizar el procedimiento se excluye la intervención del Ministerio Público en todos los procesos. Se regulan diversos tipos de hábeas corpus estableciendo un procedimiento especial ante desapariciones forzadas. La acción popular contará con medidas cautelares que suspenderán los efectos del reglamento inconstitucional antes que culmine el proceso y la sentencia declarará la nulidad de la norma con retroactividad, es decir, desde que ella entró en vigor.

La vigencia del Código –seis meses después de su publicación- deberá ir acompañada de una adecuada formación y especialización de los jueces, así como de una reforma del sistema de justicia –especialmente del Poder Judicial- que garantice una solución eficaz de estos procesos. Y es que en definitiva las reformas legales son importantes más no suficientes. Se requiere de un sistema de justicia especializado, autónomo y creativo que garantice la tutela efectiva de los derechos humanos. El Código constituye un primer paso en este esfuerzo de cambio.

Texto del Código Procesal Constitucional.



Revista 6 - AN Uruguay 1

## ACTUALIDAD NORMATIVA

### URUGUAY

#### CÓDIGO DEL PROCESO PENAL

La ley 17.773, de 20 de mayo de 2004, publicada en el "Diario Oficial" de 25 de mayo de 2004, sustituyó el artículo 113 del Código del Proceso Penal en materia de garantías para los indagados por la comisión de un presunto delito, limitaciones a la reserva de las actuaciones e igualdad procesal en el presumario entre fiscales y defensores esfuerzo de cambio.

Texto de la Ley 17.773

Noticia aportada por Eduardo Esteva





Revista 6 - AN Uruguay 2

## ACTUALIDAD NORMATIVA

### URUGUAY

#### REFORMA CONSTITUCIONAL

Al haber declarado la Corte Electoral que fue superado el número de firmas requerido, será sometido a plebiscito de ratificación, en forma simultánea con las elecciones nacionales a celebrarse el próximo 31 de octubre, el proyecto impulsado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, integrada por diversas organizaciones sociales y políticas, que fuera presentado siguiendo el procedimiento previsto por el artículo 331-A de la Constitución de la República, por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos.

Texto del Proyecto de Reforma Constitucional

Noticia aportada por Eduardo Esteva